



Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta

Sr. Estella Hoyos, Consejero

Sr. Fernández Costales, Consejero

Sr. Pérez Solano, Consejero

Sr. Quijano González, Consejero

Sr. Madrid López, Consejero y
Ponente

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 24 de mayo de 2007, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada a instancia de D. xxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 25 de abril de 2007 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada a instancia de D. xxxxx, representado por Dña. yyyy, debido a los daños sufridos en una caída por el mal estado de la acera.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 30 de abril de 2007, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 379/2007, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Madrid López.

Primero.- Con fecha 24 de marzo de 2006, Dña. yyyy, en representación de D. xxxxx, presenta en el registro general del Ayuntamiento de xxxxx una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que expone:

“Solicita: Que como consecuencia de una caída, ocasionada por tropezar con una loseta despegada y otra rota en una acera junto a la Plaza



xxxxx el Sr. D. xxxxx de 89 años de edad y domiciliado en Plaza xxxxx, 11-12, 2º C, el viernes día 17 de Marzo de 2006, le sea indemnizado por las consecuencias de dicha caída que a continuación expongo y cuya documentación adjunto.

»Descripción de los hechos: el viernes día 17-03-2006, por la mañana, D. xxxxx tropezó con la zona alterada de la acera y cayó hacia delante dándose un enorme golpe en la cabeza. Los transeúntes le ayudaron le limpiaron la sangre de la cara y llamaron a una ambulancia. La ambulancia lo trasladó al Hospital de hhhhh donde fue atendido de urgencias, dándole puntos de sutura en la nariz, y ceja izquierda, realizándole Rayos X y un TAC de la cabeza, y sugiriendo a los familiares que acudiéramos con el paciente a un neurólogo, y ocho días más tarde al médico de cabecera para seguimiento de la contusión y retirada de puntos.

»La contusión craneal es de tal grado que, aunque ya le está bajando la inflamación del ojo y cara, el paciente lleva desde entonces sin salir y hay dos familiares, que trabajan fuera de casa, pendientes de él.

»El día 27 acudirá de nuevo al médico para retirada de puntos y seguimiento de la contusión craneal, y en Abril de nuevo al neurólogo”.

Adjunta al escrito de reclamación diversa documentación médica, dos fotografías del paciente y dos fotografías del lugar en el que manifiesta que se produjo la caída.

Segundo.- El 21 de abril de 2006 el Servicio de Vialidad del Área de Ingeniería Civil y Medio Ambiente del Ayuntamiento, a petición de la Comisión de Economía y Hacienda, emite un informe en el que, con relación al siniestro de referencia, se manifiesta:

“La zona objeto de denuncia, al día de la fecha, no presenta anomalías que puedan provocar en condiciones normales incidencias de ningún tipo en el tránsito peatonal.

»Con independencia de lo anterior, se ha podido observar que la losa de granito reflejada en al fotografía que forma parte del escrito, no se encuentra totalmente asentada en toda su superficie, produciéndose pequeños



balanceos que, extraordinariamente, pudieran producir algún tipo de afección en el tránsito peatonal.

»Se han dado instrucciones para proceder a fijar totalmente la losa objeto de la denuncia”.

Tercero.- El 12 de febrero de 2007, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento emite un informe en el que se concluye que procede desestimar la reclamación.

Cuarto.- El 13 de febrero de 2007, concluida la instrucción del expediente, se acuerda el trámite de audiencia al interesado, de conformidad con el artículo 11.1 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, a efectos de que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime oportunos. Notificado al interesado en fecha 19 de febrero de 2007, no consta alegación alguna al respecto por su parte.

Quinto.- La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en sesión del día 3 de abril de 2007, formula la propuesta en la que se declara:

“Primero: En concordancia con el informe jurídico desestimar la reclamación formulada por Doña yyyyy en representación de Don xxxxx”.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado h), del



Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

3ª.- Concurren en la parte interesada los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992. No obstante debió requerirse a la parte reclamante para que acreditase, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la citada Ley 30/1992, la representación en que manifiesta intervenir Dña. yyyyy.

La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Alcalde del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de 1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expte. nº 3583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3251/2002), la



responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

En la esfera de las Administraciones locales el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que "las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa", reproducido, prácticamente de forma literal, por el artículo 223 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, remitiéndose a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de modo que resulta igualmente exigible la concurrencia de los requisitos anteriormente señalados.



5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dña. yyyyy, en representación de D. xxxxx, debido a los daños y perjuicios derivados de una caída padecida por éste como consecuencia de las deficiencias existentes en la acera –una loseta despegada y otra rota– de la Plaza xxxxx, de xxxxx, por la que transitaba.

El interesado ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esto es, antes de transcurrir un año desde la fecha del hecho causante, toda vez que éste se produjo, según manifiesta la reclamante, el 17 de marzo de 2006 y la reclamación se presentó el 24 de marzo de 2006.

En cuanto al fondo de la cuestión planteada, estima este Consejo Consultivo, al igual que los órganos que han informado a lo largo del procedimiento, que no existe responsabilidad por parte de la Corporación local por los daños causados.

Comprobadas la realidad y certeza del daño patrimonial sufrido por el interesado y la regularidad formal de su petición, la única cuestión planteada consiste en determinar si el expresado daño ha sido o no consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público, presupuesto indispensable para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, conforme al artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

La determinación de la relación de causalidad exige comprobar si, a la vista de los datos resultantes del expediente, la lesión sufrida fue o no consecuencia del defectuoso estado de la acera, de forma que el nexo causal se produjera, directa e inmediatamente, entre el funcionamiento del servicio y el daño producido, debiendo recordarse que una de las funciones que corresponden a los municipios, conforme el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es la pavimentación de las vías públicas.

En el caso examinado, la parte reclamante alega que el daño se ha producido como consecuencia de la utilización de un servicio público, pues ha sido ocasionado por el defectuoso funcionamiento del servicio viario.



Sin embargo, no ha quedado acreditado en el expediente el hecho causante de los daños sufridos por el reclamante ni la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los citados daños. Estos extremos sólo encuentran justificación en la afirmación del solicitante, lo que no es suficiente para tenerlos como ciertos, máxime si se tiene en cuenta que pudo disponerse de otros elementos probatorios al objeto de acreditar aquéllos sin que por el interesado se haya propuesto la práctica de prueba alguna, ni aun en el trámite de audiencia, en el que se le dio traslado del informe jurídico en el que se aludía a las cuestiones que ahora se analizan.

Por el contrario, ha de destacarse que en el informe de 21 de abril de 2006 del Servicio de Vialidad se señala que “la zona objeto de denuncia, al día de la fecha, no presenta anomalías que puedan provocar en condiciones normales incidencias de ningún tipo en el tránsito peatonal”.

En este sentido ha de recordarse que la carga de la prueba pesa sobre la parte reclamante de acuerdo con los viejos aforismos *necessitas probandi incumbit ei qui agit* y *onus probandi incumbit actori* y con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No habiéndose acreditado, pues, ni el hecho causante ni la relación de causalidad entre el servicio público y el daño, procede desestimar la reclamación, al no concurrir los requisitos exigidos por el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Por lo tanto, a la luz de los hechos probados y los preceptos aludidos, este Consejo Consultivo considera que en el presente caso no debe responder la Administración de los daños y perjuicios ocasionados a la parte reclamante derivados del accidente sufrido.

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación



**CONSEJO
CONSULTIVO**
DE CASTILLA Y LEÓN

presentada a instancia de D. xxxxx, representado por Dña. yyyyy, debido a los daños sufridos en una caída por el mal estado de la acera.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.